

En la Ciudad y en el campo

Luchando por Justicia Ambiental



¿QUE MOVIMIENTO SOCIO-AMBIENTAL PARA QUE PROYECTO DE PAIS?

El movimiento de las luchas socio-ambientales ha crecido y se ha fortalecido en los últimos tiempos, de la mano de las múltiples resistencias de nuestro pueblo. Los conflictos de mayor resonancia han sido las luchas de las asambleas contra la mega-minería a cielo abierto. A éstas, se suman las resistencias al avance de la frontera agropecuaria y a la utilización de agrotóxicos, así como también se asoman los conflictos contra los emprendimientos que afectan la calidad de vida de los sectores populares en las ciudades. Asimismo, la articulación en la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) nos ha fortalecido y ha puesto de relevancia cómo los gobiernos provinciales y el mismo gobierno nacional subordinan la política ambiental a la implementación de su modelo extractivo-exportador. La anunciada “profundización del modelo”, como augura la implementación del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial (PEA) no puede más que profundizar el saqueo y la contaminación que sufre nuestro pueblo y el remate del futuro de nuestro país en pos del sostenimiento de la entrada de divisas que el modelo de desarrollo colonial postula como fin último y por encima del buen vivir de nuestra gente.

Las respuestas que nuestra resistencia recibe por parte de las clases dominantes y de su fracción dirigente han sido una combinación entre represión, criminalización y estigmatización de las luchas, con acusaciones de que estaríamos oponiéndonos al bienestar de los pueblos, frenando el desarrollo o impidiendo la creación de puestos de trabajo. Complementando estas respuestas se encadenan otras, desde Universidades y ámbitos científicos con el fundamento de ser “neutrales”. Desde una

ecología tecnocrática y cientificista, se plantea que los procesos de saqueo y contaminación podrían desaparecer con algunas medidas correctivas y nuevas tecnologías. Desde esta ecología, la de los poderosos, por un lado se ofrece la tecnología como solución y por el otro se responsabiliza al hombre de la destrucción de la naturaleza. Esa estrategia se completa haciendo pagar los costos de la depredación a los sectores justamente perjudicados por el sistema que depreda. Así, se acusa a los campesinos de no utilizar tecnologías sustentables y deteriorar suelos, se los acusa de producir comida poco saludable al no estar certificada por los organismos de salud, etc; se acusa a los pobres de las grandes ciudades de generar basura, siendo que los que las generan son las clases altas y las grandes empresas.

Esta ecología de la clase dominante, puede venir disfrazada de verde, como sucede con los proyectos conservacionistas (como el de Douglas Tompkins) donde se desplaza y despoja a miles de familias campesinas. Puede disfrazarse de sostenible o sustentable, como titulan todas las empresas y organismos del estado a sus actividades económicas. Incluso, en sus versiones más progresistas, puede mostrar formas alternativas a las que organizan la vida bajo el capitalismo (sin llegar nunca a cuestionarlo).

Frente a esta ecología burguesa, surge una verdadera ecología popular. Desde nuestros cortes de ruta y nuestras Asambleas. Desde el seno de los sectores populares y sus organizaciones, ya que la defensa del medio ambiente no puede quedar en manos de especialistas y técnicos, sino del pueblo en su conjunto; sobre todo de aquellos sectores más afectados por el ordenamiento económico, social, político y

cultural del capitalismo. Una ecología popular no puede ser otra cosa que una ecología anti-capitalista, cuestionadora del crecimiento como meta de la economía. Debe también cuestionar la lógica que está detrás de la apropiación desigual de los bienes de la naturaleza (agua, tierras, semillas, etc), y la desigualdad con la que son distribuidos los costos y beneficios de la producción mercantil, donde los efectos de la contaminación los pagan los pobres, y los beneficios son apropiados de manera unilateral por las clases altas. Fundamentalmente, una

precio de los alimentos, inundaciones, privatización del espacio público, malas condiciones de transporte. Mientras crecen y se multiplican los barrios cerrados de la que gozan de todo lo necesario y mucho más los sectores beneficiarios de esta desigualdad. Todos estos temas son también problemas ambientales, que han pasado justamente a estar “naturalizados”, como si ello fuera un designio divino, o un camino inevitable hacia el “desarrollo”. Quizás no se distingan tan claramente a quienes luchan contra esta situación en las ciudades. Ni ellos mismos



ecología popular aspira a librar a los hombres y mujeres de nuestro pueblo y a nuestra madre tierra, del sistema que amenaza con llevarnos a la destrucción, el sistema del Capital.

En los últimos tiempos, junto a las luchas en las provincias cordilleranas y las resistencias campesinas y de los pueblos originarios, van surgiendo nuevos actores de la lucha socio-ambiental en las grandes ciudades y su periferia. Las ciudades también manifiestan esta desigualdad ambiental: basurales a cielo abierto, condiciones de hábitat deficientes, alza del

se llaman a sí mismos ambientalistas o ecologistas, dada la cantidad abrumadora de cuestiones por las que salir a luchar. Y por eso mismo, muchas veces, su mirada no se dirige hacia la UAC ni los vemos en nuestras asambleas y encuentros. Pero la lucha es la misma y podemos comenzar a mirarnos y encontrarnos. En este boletín, el 2º de la COMPA ecología popular, intentamos reflejar varias de estas experiencias. Para hacer nuestro pequeño, modesto aporte, a esta gran lucha en que todos y todas estamos embarcados.

MARCADOS POR EL PLOMO

INJUSTICIAS AMBIENTALES EN BUENOS AIRES

Diosnel Pérez, militante del Frente Popular Darío Santillán, explica cómo se le niega el derecho a una vivienda digna en un ambiente sano a miles de personas en la Villa 20 de Buenos Aires.

La situación social en la Villa 20 de Buenos Aires está marcada por variadas problemáticas, algunas de las cuales quedaron solapadas luego de la brutal represión policial ante la toma del Parque Indoamericano que provocó la muerte de tres personas en diciem-

bre pasado y el procesamiento de algunos referentes sociales. Uno de ellos es Diosnel Pérez, militante del Frente Popular Darío Santillán (FPDS), quien ha relatado en numerosas ocasiones las luchas que se están llevando a cabo en la villa, luchas que sin duda son por justicia ambiental.

Diosnel nos recuerda que hace 17 años existe en la orilla de su barrio un “Cementerio de autos” donde la Policía deposita los vehículos que se encuentran bajo causas judiciales. En los últimos años los vecinos han



denunciado que dicho depósito constituye un foco de contaminación, lo cual ha sido constatado por profesionales del Centro de Salud y Acción Comunitaria 18 (CESAC 18) y por estudios realizados en las Facultades de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Entre los perjuicios más serios se destaca la contaminación por plomo en sangre, de la cual son víctimas sobre todo los niños (el 40 por ciento de los niños de la villa la padecen). También se constataron enfermedades respiratorias producto de la quema de materiales de los autos, y del mismo polvo que se levanta del suelo. Se han registrado del mismo modo infecciones cutáneas, ya que en el predio y sus alrededores los niños juegan en contacto directo con los materiales de los autos. También es producto de esta situación, asegura Diosnel Perez, la contaminación del agua: “el Cementerio de autos está un metro y medio más alto que donde nosotros vivimos, entonces todos los óxidos que caen del auto vienen por las napas y entra a nuestras casas, y a través de eso contamina”, por lo cual el problema también es que el agua no es segura para ser utilizada.

Estos impactos negativos en la vida de los habitantes de la Villa 20 fueron comprobados por la Justicia y la Legislatura de la ciudad, que se han expedido a favor de los vecinos al exigir tanto al Gobierno porteño como al nacional que retiren los autos y saneen el predio. Sin embargo, el Cementerio de autos sigue ahí, con las chatarras expidiendo plomo. Más aún, este mismo predio está incluido en la futura urbanización de la villa, de acuerdo a la Ley 1770/05 de la ciudad. Y si el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA) urbaniza simplemente construyendo casas, sin tener en cuenta la contaminación antes consignada, estaría vulnerando el derecho a una vivienda digna, derecho por el cual tanto luchan los vecinos. Claro que ni siquiera existe un amago de urbanización por parte del Ejecutivo a cargo de Mauricio Macri: “para darse una idea del descaro de esta gente podemos

recordar nuestra lucha contra el dengue de 2009, porque el Cementerio de autos además es un matorral que es un fenomenal nido de mosquitos y ratas. Y por eso elevamos una nota con la gente del CESAC pidiendo tules y repelentes. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? Mandaron dos frascos de repelente para 42 mil habitantes, una tremenda burla para todos nosotros” completa Diosnel.

Sumado a esta situación, donde el estado es el principal responsable de la contaminación, el GCABA parece redoblar la apuesta queriendo construir un Polo Farmacéutico en la zona próxima al Parque de la Ciudad. Se construirían 22 laboratorios en un radio de 87 mil m², a un valor de \$150 cada uno. Como si esto fuera poco, el Banco Ciudad implementó una línea de créditos especial para las empresas que decidan instalarse allí. Esto generaría un fuerte contraste en un barrio donde la estabilidad de la energía eléctrica y la presión de agua son generalmente bienes escasos, ya que estos laboratorios son altamente demandantes de esos servicios. Esto muestra la injusticia en la apropiación del espacio, pero lo que más preocupa son los efectos sobre la salud que esto pudiera generar, dado que los residuos de este tipo de industrias son considerados altamente peligrosos como resultado de los procesos de fabricación de las drogas y otros productos.

Mientras se ofrece facilidades a estas empresas para instalarse, se argumenta que no hay lugar para garantizar vivienda digna en un ambiente sano a todos los habitantes de la villa. A la par que se incumple con la construcción del Hospital de Lugano (que se planea construir desde 1986 luego de promulgada la Ordenanza 41.795), se gastan dos millones de pesos para la construcción del Parque Roca. En definitiva, a los vecinos como Diosnel Pérez y otros que se organizan para reclamar viviendas dignas se le ofrece más de lo mismo: plomo, pero en balas.

“NOSOTROS DECIDIMOS QUÉ BARRIO QUEREMOS”

INJUSTICIAS AMBIENTALES EN BUENOS AIRES

La Mesa por la Urbanización Participativa de la Villa 21-24 trabaja para revertir las condiciones indignas en las que se encuentran alrededor de 60 mil personas en el sur de Buenos Aires.

En la zona sur de Buenos Aires, más precisamente en el barrio de Barracas y a la vera del Riachuelo, se encuentra la villa más densamente poblada de la ciudad: la Villa 21-24.

Para acercarnos a la problemática conversamos con los compañeros del Movimiento de Trabajadores Desocupados de Barracas (MTD Barracas), perteneciente al Frente Popular Darío Santillán (FPDS), y del Observatorio Urbano Ambiental del Sur (OUAS), un equipo con inserción en la villa que trabaja desde la investigación-acción comunitaria y participativa. Hoy ambos grupos, junto con otras organizaciones y vecinos de la villa, conforman la Mesa por la Urbanización Participativa de la Villa 21-24, donde los vecinos ponen en discusión qué barrio quieren. Según el OUAS, en la villa “no hay acceso a agua segura porque las conexiones de agua de red y de cloacas son altamente precarias (se pinchan los caños y se mezcla el agua corriente con las aguas residuales), la corriente eléctrica se corta constantemente y por períodos muy prolongados, las calles no están asfaltadas, los pasillos están en muy mal estado, no existe un sistema de recolección de residuos funcional, y la basura se acumula en las calles y en basureros clandestinos en enormes pilas”. Por estos motivos, los habitantes de la Villa 21-24 padecen constantemente enfermedades gastrointestinales, respiratorias y dermatológicas, entre otras. En este sentido, la falta de salud es un tema muy presente entre las inquietudes vecinales. Sin embargo, estas preocupaciones no son percibidas como resul-

tado de las condiciones ambientales. Para los compañeros del Observatorio “los problemas ‘ambientales’ en la Villa 21-24 existen sólo como una preocupación en la práctica”.

Es a partir del fallo por la causa Mendoza y de la creación de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) que empiezan a vincularse las problemáticas cotidianas con lo ambiental. En este contexto comienza a conformarse en 2010 la Mesa por la Urbanización Participativa en la Villa 21-24, teniendo como base que desde 2001 han surgido en la villa numerosas organizaciones comunitarias, consolidando una fuerte experiencia de organización barrial (hoy hay en el barrio tres Bachilleratos Populares y alrededor de veinte comedores). Por otro lado, se tomó el antecedente del proyecto participativo presentado por el Arq. Javier Fernández Castro, de acuerdo al cual se aprobó la Ley de Urbanización de las Villas 31 y 31bis de Retiro en 2009. De hecho el mismo arquitecto con su equipo se encuentra hoy armando junto a los vecinos de la Villa 21-24 el proyecto para urbanizar su barrio.

Desde la Mesa se plantea la necesidad de realizar un proyecto de urbanización distinto, en el que se piense a la villa de manera integral. Y por sobre todo que se trate de un proyecto armado participativamente con los vecinos, donde éstos expresen cómo quieren urbanizar, cómo quieren vivir. De este modo, se plantea el derecho a la ciudad en términos de “nosotros decidimos que barrio queremos”. Asimismo se invita a reflexionar acerca de la capacidad que tiene la población de producir la propia vida, a darse cuenta de que “urbanizar no es solamente abrir calles y construir casitas”. La idea de la Mesa es vincular todo, modificar el



eje de concepción de lo que es la urbanización, incorporando los elementos ambientales, educativos, laborales, políticos y las relaciones sociales construidas en el barrio.

Por su parte, los compañeros del MTD Barracas nos comentan que “la villa está en un centro urbano, pero a su vez no tiene las condiciones mínimas de vivienda. Hay que integrarla a la ciudad (...) pensar su identidad, su forma de vivir. Y que los vecinos tengan el derecho a vivir en la ciudad de Buenos Aires”. Todo esto sin romper las relaciones sociales ya establecidas en el barrio, considerando que algunos vecinos van a tener que ser relocalizados. Cuando les preguntamos cómo proyectaban la Mesa, de cara a los próximos cuatro años de gobierno macrista nos dijeron: “si el proyecto sale de los

vecinos, no va a quedar sólo en proyecto (...) No es sólo pensar el proyecto de urbanización, sino ver cómo lo llevamos adelante, por eso estamos las organizaciones, porque también es un proyecto político de cómo llevarlo adelante”.

La villa 21-24 es un caso testigo de la problemática urbano-ambiental y de la violación de dos derechos fundamentales: el derecho a la ciudad y el derecho a habitar en un ambiente sano. En este sentido, La Mesa por la Urbanización es un ejemplo de las luchas por la justicia ambiental, las cuales no siempre son consideradas como tales por el discurso ambientalista dominante.

NEGOCIOS TURBIOS EN VILLA ARGÜELLO

UNA LUCHA EN DEFENSA DEL TERRITORIO

Productores rurales, estudiantes y profesionales de distintas ramas reunidos en la Multisectorial en Defensa de las Tierras de la Universidad Nacional de La Plata defienden terrenos de la contaminación y el despojo en Berisso (provincia de Buenos Aires).

En el barrio Villa Argüello de la ciudad de Berisso, lindante a la destilería de la empresa multinacional Repsol-YPF, se encuentra el predio “6 de agosto”, un conjunto de tres terrenos de 54 hectáreas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). La actual gestión de la UNLP está avanzando en un proceso de privatización de estos terrenos, y su intención es vender 47 hectáreas del predio al consorcio Puertos La Plata (que localizaría allí una base logística de contenedores) y otra parte a Repsol-YPF, que ampliaría de este modo sus instalaciones. Asimismo, se desprende de los documentos del plan estratégico elaborado por la propia universidad que la zona en su custodia está altamente contaminada, situación que ha sido denunciada judicialmente.

A raíz de estas circunstancias, en mayo de este año se formó la Multisectorial en Defensa de las Tierras de la UNLP, la cual está integrada por estudiantes y docentes de la misma universidad, miembros del Centro Social y Recreativo Villa Argüello, vecinos de barrio, integrantes de los Espacios de Salud, Tierra y Vivienda, y Bienes Comunes del Frente Popular Darío Santillán (FPDS) y trabajadores del tambo que funciona en las tierras en conflicto, entre otros. Este grupo pretende que cese la contaminación de estas tierras y que no se las entreguen a quienes desean lucrar con el patrimonio público.

Luz, trabajadora del emprendimiento de quesos

del FPDS, explica: “somos seis familias trabajando en este espacio; también hay un emprendimiento de huerta, actividades de 3ro y 5to año de la Facultad de Veterinaria, y de 1er año de la de Agronomía. El tambo abastece más de seis comedores y al emprendimiento productivo de quesos...”, los cuales se verían seriamente perjudicados de seguir adelante la mencionada avanzada privatista. Por su parte Bernardo, estudiante de la Facultad de Agronomía, afirma que “el gobierno de la universidad ha demostrado tener una mirada privatista y servil a los negocios inmobiliarios respecto a las tierras de su propiedad, tierras públicas de todos aquellos que estamos vinculados a la universidad. Esta venta se relaciona directamente con un mega proyecto que incluye la ampliación del puerto y el paso de un nuevo tramo de la autopista por este sector. A principio de año se cedieron dos hectáreas para los no docentes con el fin de construir un complejo de viviendas. Nosotros nunca nos opusimos a esto, el problema fue que esas viviendas querían ubicarlas de un modo transversal a lo que es el paso de las vacas del tambo, perjudicando este proyecto. Ahí entendimos que era una estrategia para terminar vendiendo las 47 hectáreas restantes”.

Diferentes estudios del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIMA), que reúne a las facultades de Ciencias Exactas y Trabajo Social junto al Hospital de Niños, comprobaron que las y los niños y jóvenes que viven cerca de donde se encuentran radicadas empresas como Repsol-YPF y Copetro (productora de carbón de petróleo calcinado) tienen disminuida su capacidad respiratoria. También alertaron que los niveles de contaminación en las ciudades de La

Plata y Berisso son alarmantes, y que no sólo las emisiones gaseosas son constantes, sino también el vuelco de hidrocarburos en los canales cercanos a las empresas.

Cintia, integrante del Espacio de Salud del FPDS y estudiante de Medicina, comenta que “para aportar al Proyecto de la Multisectorial armamos una encuesta que se orienta más que nada a hacer un relevamiento de las problemáticas que existen en el barrio respecto a la salud, y específicamente en relación a la contaminación ambiental, es decir problemáticas respiratorias, cutáneas, de alergias y también de neoplasias,

realizando volanteadas informativas, y se difundió la problemática a través de una radio abierta en una jornada en el Playón Municipal de Berisso, y en la Fiesta del Vino de la Costa y la del Inmigrante. Se hicieron también dos jornadas culturales en el Club Villa Arguello con los vecinos y las vecinas del barrio y los actores involucrados puntualmente en el conflicto, con vistas a elaborar un proyecto que surja de los deseos y necesidades en común. Se entregó a su vez una carta abierta al Decano de la UNLP Fernando Tauber y al Intendente de Berisso Enrique Slezack, y se realizaron charlas en las



que son frecuentes en personas sujetas a este tipo de contaminación, incluyendo en la encuesta un apartado donde las vecinas y los vecinos pueden decir si están a favor o en contra de esta venta y dejar su propuesta de que harían en esas tierras que están en su barrio. También estamos realizando talleres en la Escuela N° 8 del barrio en relación a salud ambiental y contaminación mediante la herramienta de mapeo colectivo”.

A lo largo del año, desde la Multisectorial en Defensa de las Tierras de la UNLP se vinieron

Facultades de Agronomía, Ciencias Naturales y Trabajo Social difundiendo esta lucha, la cual estuvo además presente en el Congreso de Estudiantes de Agronomía.

En este conflicto queda a las claras la complicidad entre las autoridades municipales y universitarias y los empresarios que corren detrás de un negocio millonario. Sin embargo, tampoco quedan dudas que la Multisectorial en Defensa de las Tierras de la UNLP seguirá dando batalla por defender los terrenos de Villa Argüello del lucro y la contaminación.

SEMBRANDO SUEÑOS

La COMPA pelea en el campo

La Cooperativa de Trabajadores Rurales de San Vicente (provincia de Buenos Aires) desde hace seis años viene forjando vínculos solidarios entre las personas para lograr así una relación no mercantilizada con la tierra y la naturaleza.

La Cooperativa de Trabajadores Rurales (CTR) de San Vicente nace al calor de la formación del Frente Popular Darío Santillán. Surge de la necesidad de trabajar de distintos compañeros, y de la falta de posibilidades para acceder a tierras para poder labrarlas. En la zona de San Vicente prevalece la especulación inmobiliaria debido a que la tierra suele destinarse a la construcción de barrios privados. Estos a su vez se rodean de comercios que se afincan allí para satisfacer sus necesidades. De este modo, la única opción que le queda al trabajador de la zona es emplearse al servicio de estos exclusivos asentamientos.

Con la toma de un terreno, la CTR se propuso desarrollar una propuesta que promueva un tipo de trabajo cooperativo, en el cual no prevalezcan las relaciones formales de empleo sino que cada compañero tenga la posibilidad de decidir y discutir las resoluciones grupales. Desde ese lugar asimismo se establece una relación diferente con la tierra y la naturaleza. “A partir de este primer trabajo las necesidades de la gente y de los niños que viven en las zonas urbanas cercanas hicieron que debamos abrir un espacio en la región urbana para poder trabajar con ellos, para poder darles al menos un mínimo de atención de la que necesitan. Es así que actualmente la cooperativa cuenta con tres lugares de trabajo, dos rurales y uno urbano” explica Suri, militante de la organización.

En las áreas rurales se desarrollan trabajos agropecuarios: se sostienen huertas, se

crian algunos animales de granja, y se elaboran quesos y dulces. Estos productos son comercializados a través de diversas redes de comercio alternativas y en las ferias regionales que se organizan. En el nuevo terreno que tiene la cooperativa se apunta a la formación de una comuna. Esta apuesta busca expresar una comunidad organizada que puertas adentro logre forjar nuevos lazos solidarios y otra forma de trabajar: “la comuna es un lugar donde viven y a la vez producen las familias. Esta idea viene un poco de la experiencia del MST de Brasil, y de las que se están armando ahora en Venezuela. Y si bien tenemos muchas experiencias de toma de tierras dentro del sector rural de la COMPA, respecto a estos países estamos muy atrasados y queremos organizarnos junto a ellos para pensar propuestas de políticas públicas en conjunto” agrega Suri.

La COMPA, como herramienta política que vehiculiza las demandas populares que vienen del campo, va dando sus frutos. Según Suri, “estamos fuertes con el sector rural. En el marco de las Jornadas de Soberanía Alimentaria del año pasado pedimos recursos a la Subsecretaría de Agricultura Familiar para proyectos productivos. Había organizaciones de Chaco, Formosa, Mendoza, Tandil, La Rioja, Jujuy y Buenos Aires. Y logramos firmar un acuerdo marco donde se comprometían a destinar fondos a nuestros proyectos, sin que tuviésemos que ir detrás de la burocracia completando formularios para cada proyecto en particular”.

De todos modos la CTR San Vicente, al igual que el sector rural de la COMPA en su conjunto, no pretende centrar su lucha en la obtención de recursos estatales. Sino que apunta a

lograr un trabajo genuino de la tierra, más allá de cualquier gobierno. A fin de cuentas, la apu-

esta es vivir de lo que producen, del fruto de su trabajo organizado.



LA TIERRA, PARA QUIENES LA TRABAJAN

UNA LUCHA EN DEFENSA DEL TERRITORIO

La Organización de Trabajadores Rurales de Lavalle, que nuclea a familias agricultoras del norte de Mendoza, hace más de diez años que no se resigna a entregar sus tierras a los agrobiznegos.

La Organización de Trabajadores Rurales de Lavalle (OTRAL) se formó hace más de diez años, cuando un grupo de familias agricultoras de esta zona del norte de Mendoza comenzó a organizarse para encontrar respuestas a la falta de vivienda. Hoy en día son aproximadamente cien familias que llevan adelante la lucha por el acceso a la tierra para vivir y trabajar.

“Trabajamos en torno a la problemática de la tierra, luchamos por la tierra”, afirmó Fernando Durán de la OTRAL en el XVI° Encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) que se realizó en Quimilí, Santiago del Estero, entre los días 16 y 22 de agosto pasados. Es que la falta de acceso a la tierra inhibe toda posibilidad para los trabajadores rurales. Sin medios para trabajar y comercializar su producto, resultan excluidos por un modelo productivo que desplaza a los pequeños productores, engrosando así los cordones de pobreza de las grandes ciudades. Frente a esto, en 2009 los campesinos organizados en la OTRAL tomaron 200 hectáreas de tierra ubicadas sobre la Ruta N° 34, dando así respuesta a demandas que llevaban años sin ser atendidas. Actualmente, otras familias de la organización están llevando adelante una toma de 60 hectáreas para emprendimientos productivos y casas de familias.

La demanda por el acceso a los servicios básicos y las condiciones de tenencia son las principales preocupaciones de la organización. Frente a estas exigencias básicas, la acción del Estado com-

bina un reconocimiento parcial de la necesidad de acceso a la tierra con reticencia a la hora de brindar soluciones: “llamaron a una mesa de negociación por intermedio del Ministerio de Agricultura familiar y por la Dirección de Tierras Fiscales. Los compañeros y principalmente las familias que están viviendo en la toma con conflicto en este momento tienen que decidir si esta instancia de negociación les sirve o no. Y desgraciadamente no hemos tenido muy buena respuesta, por ejemplo, con el tema de la luz que no se solucionó. Llamamos a una instancia de negociación sin haber solucionado el tema puntual de la luz” expresan desde la organización mendocina.

Luego de atender estas necesidades inmediatas, desde la OTRAL se prioriza el trabajo de la tierra, produciendo alimentos y generando herramientas para su comercialización y elaboración: “hay una idea de que cada familia pueda tener sus cinco hectáreas productivas. Y también proyectos que tienen que ver más con lo colectivo, con la organización. Tienen que ver con un trabajo que ya se viene dando en cuanto a la generación de productos agrícolas y también potenciarlo con una fábrica y otras herramientas”.

De esta manera, se intentan desarrollar construcciones de base que permitan dar respuestas auténticas a problemáticas negadas por las autoridades tanto locales como nacionales. Se trata de prácticas colectivas que se suman a las luchas de los miles de agricultores familiares, pueblos originarios y trabajadores rurales que recorren las provincias, pero permanecen ignoradas frente al avance del modelo de agrobiznegos. Mientras las leyes y planes estratégicos dictados por el gobierno y festejados por

corporaciones y empresas consagran el arribo irrestricto de capitales que colocan la tierra en función de las necesidades de un mercado mundial cada vez más volátil, los trabajadores

rurales encuentran en la lucha y organización el camino para resolver las necesidades más elementales, y a partir de allí generar sus propias condiciones de desarrollo genuino.



POSICIONAMIENTO DE LA COMPA FRENTE AL PLAN ESTRATEGICO AGROALIMENTARIO Y AGROINDUSTRIAL

Recientemente el gobierno nacional anunció un nuevo Plan Estratégico Agroalimentario (PEAA) y una ley de Tierras supuestamente destinada a poner límites a la extranjerización creciente. Sin embargo, sostenemos que en un país en donde las políticas de estado fortalecen el agro-negocio y en donde las propuestas de ley no combaten la concentración en la propiedad y en el uso de la tierra ni el modelo productivo, estas iniciativas nos alejan aún más de la necesaria Soberanía Alimentaria.

El modelo dominante de producción “agro minero exportador”, de agricultura industrial o “agro-negocios”, se caracteriza por una fuerte intervención del capital financiero en la actividad, uso indiscriminado de insumos derivados del petróleo, contaminación, exclusión de pequeños productores y pérdida de biodiversidad. En este modelo las ganancias formidables son para las grandes empresas, que son las productoras de semillas y otros insumos (agroquímicos y fertilizantes), dominando toda la cadena de comercialización. Además, los capitales funcionan como fondos de inversión que arriendan gran cantidad de hectáreas para el desarrollo de unos pocos cultivos, donde los agricultores pierden autonomía y son las empresas las que definen todas las prácticas. Este es un modelo de agricultura sin agricultores, con un fuerte impacto negativo sobre el ambiente, por pérdida de nutrientes en el suelo y de biodiversidad. Este modelo ha llevado a la producción prácticamente de un solo cultivo, soja. En la última campaña se han sembrado 20 millones de hectáreas de esta oleaginosa, siendo más del 50% de la superficie total sembrada en

nuestro país.

El plan Agroalimentario pretende aumentar la superficie sembrada de 32 millones de hectáreas a 41 millones con lo que avanza la frontera agrícola hacia territorios donde hoy las comunidades campesinas e indígenas están resistiendo desalojos. Se explicita la intención de aumentar la productividad de 100 millones de toneladas a 158 millones, con lo que las consecuencias negativas del modelo tenderán a profundizarse.

Las menciones que se hacen en dicho proyecto a la agricultura familiar y la soberanía alimentaria quedan empañadas y desdibujadas cuando su tronco central muestra una cara productivista que intenta ubicar a nuestro país, en los próximos 10 años, entre los principales exportadores mundiales de granos de oleaginosas y cereales.

Por otra parte, sobre el proyecto presentado por el Ejecutivo Nacional sobre ley de tierras, que pretendería evitar la extranjerización de este recurso estratégico y no renovable, creemos necesario hacer algunas consideraciones. Si por un lado es valioso poner en debate este tema, porque entendemos que el territorio nacional es fundamental para el debate de la soberanía nacional y compartimos la necesidad de limitar la extranjerización de la tierra, el proyecto no afecta los derechos adquiridos por los grandes terratenientes extranjeros y establece un máximo de 20 % de tierras rurales del territorio nacional en manos extranjeras, hoy dueñas de cerca del 10 %, con lo que esta ley permitiría casi duplicar este porcentaje. Nuestro proyecto

Las organizaciones de campesinos/as, desocupados/as, trabajadores/as ocupados/as, estudiantes, culturales y de género, agrupadas en la COMPA (Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina), queremos un país en el que la tierra se use en función del bienestar social y no del lucro del agro-negocio; en el que se cuiden nuestros bienes comunes y respete a la naturaleza; en el que la tierra esté en manos del pueblo y sea éste el que decida qué y cómo producir alimentos. Es necesario para esto dar pasos concretos en la construcción de la Soberanía Alimentaria y Popular.

Luchamos por una agricultura que priorice la alimentación del pueblo y exporte los excedentes, sin dependencia de agroquímicos ni de corporaciones que fijen las reglas. Para ello es necesario avanzar sobre la cadena de comercialización y la estatización de las exportaciones. Queremos un campo con gente trabajando y viviendo de la tierra, sin que deban trasladarse a las grandes ciudades a engrosar las villas miseria, faltos de vivienda y trabajo. Es

necesaria una integración de la comunidad rural y urbana en la producción de materia prima, valor agregado y un comercio justo. Es necesario una infraestructura energética y de acceso al agua para que todas las comunidades rurales y urbanas puedan vivir dignamente. Es necesario el cuidado y uso sustentable de nuestros bienes comunes. Así entendemos y construimos la soberanía alimentaria y popular, en nuestro caminar por una vida digna y plena.

Creemos que el único camino hacia una verdadera justicia social es la construcción de un proyecto popular, diseñado e impulsado desde las organizaciones que construyen poder popular tanto en el campo y en la ciudad.

POR LA DEFENSA DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y POPULAR
POR LA INTEGRACIÓN SOLIDARIA DE LOS PUEBLOS LATINOAMERICANOS
POR UNA LEY DE TIERRAS QUE PRIORICE LA AGRICULTURA FAMILIAR Y EL AUTOCONSUMO POPULAR





Región Buenos Aires

Cátedra Abierta de Estudios Americanistas; Centro Cultural de los Trabajadores; Colectivo de Educación Popular en Cárceles; Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares (CEIP); Espacio Chico Mendes; Estudiantes Críticos Lanús; Frente Popular Darío Santillán; Grupo de Estudios sobre América Latina y el Caribe (GEAL) Juventud Rebelde 20 de Diciembre (La Mella, Lobo Suelto, La Trifulca); Organización Popular Fogoneros; Rebelión – Corriente Universitaria; Socialismo Libertario.

Región del NOA

TIERRHA; Colectivo de trabajadorxs “PANGEA”, Frente Popular Darío Santillán (Jujuy, Tucuman, Salta); Movimiento Libertario Anarquista, Frente Riojano de Organización Popular (FROP); Grupo Ecologista Pro Eco; Retamo (San Juan).

Región de Cuyo

Colectivo La Minga; El Espejo; Organización feminista anticapitalista La Otredad; Organización de Trabajadores Rurales sin Tierra de Lavalle (OTRAL).

Región Patagónica

Frente Popular Darío Santillán.

Región del NEA

Cátedra Abierta de Estudios Americanistas; Frente Popular Darío Santillán; La Otra Voz.

Región Centro

Comedor Germinal; Córdoba se Mueve; Frente Popular Darío Santillán; Socialismo Libertario.